

Transición y violencia política en Chile (1988-1994)

Igor Goicovic Donoso*

Universidad de Santiago de Chile

Resumen: Uno de los problemas más complejos a los que debió enfrentarse el proceso de transición a la democracia, entre 1988 y 1994, fue la continuidad de las acciones de violencia política. Organizaciones como el FPMR, el MAPU-Lautaro y el MIR, que recurrieron a la lucha armada como forma preferente de acción política, pusieron en jaque la estabilidad de la institucionalidad democrática. No obstante, la rápida derrota de la insurgencia se encuentra relacionada con la efectividad del trabajo represivo y con la pérdida de base social de los grupos subversivos.

Palabras clave: historia, democracia, transición, violencia, insurgencia.

Abstract: One of the most complex problems that faced the transition to democracy between 1988 and 1994 was the continuity of the actions of political violence. Organizations like the FPMR, the MAPU-Lautaro and MIR, which resorted to armed struggle as preferred form of political action, have threatened the stability of the democratic institutions. However, the rapid defeat of the insurgency is related to the effectiveness of the repressive work and to the loss of social base of subversive groups.

Keywords: history, democracy, transition, violence, insurgency.

* Este trabajo forma parte de los proyectos de investigación: *España y Chile: similitudes y diferencias en la transición a la democracia. Análisis comparado en las ciudades de Murcia y Concepción*, Proyecto HUM2007-63387, Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General de Investigación, Proyectos I+D, Acciones Estratégicas y Errantes, Murcia (2007-2010), y *Representaciones político-culturales para la recuperación de la democracia y las transiciones: España/Europa y Argentina/Chile*, Programa Conjunto CSIC-USACH, Madrid-Santiago de Chile (2009-2010). Agradezco a la profesora Cristina Moyano y al profesor Claudio Pérez sus contribuciones a la elaboración del mismo, y a la estudiante de Magíster Andrea Armijo Reyes, su trabajo de recopilación de fuentes.

Presentación

El modelo político de transición a la democracia en Chile ha sido ampliamente validado por la comunidad internacional. Su hito de inauguración se encuentra en el plebiscito de octubre de 1988, en el cual el dictador, Augusto Pinochet Ugarte, fue derrotado por un amplio margen electoral. A pesar de su derrota, las fuerzas armadas chilenas se convirtieron en garantes de un proceso político que favoreció el restablecimiento gradual de la institucionalidad democrática, bajo el liderazgo de una alianza política moderada (la Concertación de Partidos por la Democracia). Pero al observar de manera más rigurosa la fase temprana del proceso transicional (1988-1994), es posible constatar que la violencia política se convirtió en un factor que, en su recurrencia, concitó el interés preferente de la política pública y, en su extensión, amenazó el nuevo orden institucional. En este artículo nos proponemos analizar, en perspectiva histórica, las características que asumió la insurgencia armada en Chile en la primera etapa de la transición política, develando su relación profunda con el régimen dictatorial y con las precariedades e insuficiencias propias del proceso de transformación institucional.

Sistema político y violencia política en Chile

Los procesos políticos más importantes que han jalonado el devenir del Chile republicano se encuentran sistemáticamente ligados al ejercicio de la violencia política. En efecto, tanto la Guerra de Independencia (1810-1818) como las sucesivas disputas interoligárquicas por la imposición de un modelo de organización de la sociedad y el Estado (1823-1830, 1850, 1859 y 1891) tuvieron en el ejercicio de la violencia un recurso privilegiado¹. Posteriormente, tanto el régimen oligárquico como su sucesor, el modelo mesocrático-populista, recurrieron a la violencia para contener la irrupción, primero, y el desarrollo, después, del movimiento obrero y de las organizaciones revolucionarias. De esta manera, las manifestaciones obreras, sus organizaciones

¹ SALAZAR, G., y PINTO, J.: *Historia contemporánea de Chile. Estado, legitimidad y ciudadanía*, vol. 1, Santiago de Chile, LOM, 1999, pp. 125-151.

y sus hitos de radicalismo más emblemáticos fueron sistemáticamente reprimidos por el Estado de acuerdo con los requerimientos de las clases dominantes y del sistema institucional².

Tras el desplazamiento de la oligarquía de la esfera del poder político, a comienzos de la década de 1920, y con el ascenso al mismo de una nueva elite mesocrática (burguesía urbana, profesionales universitarios y burocracia funcionaria), se comenzó a producir la llamada «institucionalización del conflicto de clases», proceso que operó a través de la legislación laboral y que conllevó la integración parcial de las principales demandas de los trabajadores organizados (ampliación del derecho al sufragio, conquistas económico-laborales, reconocimiento social y político, etcétera) y una gradual atenuación en la aplicación de los mecanismos coercitivos de control social. Se constituyó, de esta manera, el «Estado de Compromiso», modelo político que, a través de su permanente profundización, amplió la participación política popular (voto femenino, sindicación campesina, organización barrial, etcétera), siempre en el marco institucional sancionado por el consenso³.

La llegada al gobierno de la colación izquierdista (Unidad Popular), encabezada por Salvador Allende en 1970, y la inauguración de la llamada «vía chilena al socialismo» se explican precisamente por esta doble y contradictoria realidad. Por una parte, un sistema político que en cincuenta años se amplió de tal manera que facilitó el acceso de los sectores más radicalizados al gobierno y, por otra, un proceso ascendente de tensiones sociales y políticas que exigía una salida radical a los problemas estructurales del país. Esa salida fue el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que llevó al poder a una dictadura militar que revolucionó, en lógica capitalista, la estructura económica, social y política del país⁴.

Efectivamente, el golpe militar en Chile no fue el típico cuartelazo latinoamericano, ni se planteó el ejercicio transitorio del gobierno para restituir a la oligarquía tradicional el poder que le había sido arreba-

² Cf. SALAZAR, G., y PINTO, J.: *Historia contemporánea de Chile. Actores, identidad y movimiento*, vol. 2, Santiago de Chile, LOM, 1999, pp. 31-46, y FERNÁNDEZ, E.: *Estado y sociedad en Chile, 1891-1931. El Estado excluyente, la lógica estatal oligárquica y la formación de la sociedad*, Santiago de Chile, LOM, 2003, pp. 67-112.

³ SALAZAR, G., y PINTO, J.: *Historia contemporánea...*, *op. cit.*, pp. 151-166.

⁴ QUIROGA, P.: «Treinta años después: reflexiones sobre la violencia y el poder», *Cuadernos Sociológicos*, 3 (2004), pp. 171-185.

tado. Fue una intervención institucional (del conjunto de las Fuerzas Armadas y del orden), orientada a reconstruir la sociedad chilena sobre nuevas bases económicas, sociales y políticas. Se trató, en definitiva, de una refundación⁵. Consecuente con este objetivo, la dictadura militar recurrió a la represión como principal mecanismo de control social. La represión política fue, por lo tanto, una condición imprescindible para garantizar el éxito del proceso refundacional y un elemento clave para destruir definitivamente la estrecha relación entre izquierda política y movimiento popular⁶. El modelo refundacional alcanzó su consagración institucional con la Constitución Política de 1980. En ella se estableció un sistema político fundado en instituciones autoritarias, con un poder presidencial fuerte, un Parlamento debilitado, con gobiernos locales designados y con unas Fuerzas Armadas autónomas respecto del poder político y que desempeñaban el rol de garantes del orden institucional. El objetivo era generar una sociedad de sujetos obedientes frente al gobierno y leales a la patria (cuya definición correspondía y era atributo de sus defensores históricos: las Fuerzas Armadas)⁷. Para ello se dotaba a las autoridades correspondientes de los instrumentos legislativos y operativos que permitieran identificar a los enemigos de la patria para proceder a su extirpación. Entre los instrumentos más recurrentes de la aplicación de dicha política encontramos la Ley Antiterrorista (1982), el endurecimiento de la Ley de Seguridad Interior del Estado (1933) y de la Ley de Control de Armas y Explosivos (1972), la ampliación de las atribuciones de los tribunales militares (fundamentalmente para conocer y resolver causas criminales que afectaban a civiles), y la militarización de los organismos policiales de seguridad: Central Nacional de Informaciones (CNI), Carabineros y Policía de Investigaciones⁸.

A partir de la crisis económica internacional de 1981-1982, la situación política y social se tornó cada vez más compleja. Entre los años

⁵ Al respecto, véase YOCELEVSKY, R.: *Chile: partidos políticos, democracia y dictadura, 1970-1990*, Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica, 2002, pp. 69-103.

⁶ Cf. RETTIG, R. (coord.): *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*, Santiago de Chile, Imprenta de La Nación, 1991; GARRETON, M. A.: *The Chilean political process*, Boston, Unwin Hyman, 1989, y BARROS, R.: *By reason and force: Military constitutionalism in Chile, 1973-1989*, Chicago, UMI Dissertation Services, 1996.

⁷ Sobre este punto véase MAIRA, L.: *La Constitución de 1980 y la ruptura democrática*, Santiago de Chile, Emisión, 1988.

⁸ TIRONI, E.: *Los silencios de la revolución. Chile: la otra cara de la modernización*, Santiago de Chile, Antártica, 1988.

1983 y 1987, el descontento popular contra el régimen militar se expresó a través de una serie de manifestaciones callejeras que adquirieron crecientes grados de violencia⁹. El enfrentamiento social se volvió más agudo y, al amparo del mismo, la oposición política al régimen logró reconstruir sus organizaciones. En ese contexto se perfilaron dos alternativas de superación de la dictadura militar. Una estaba representada por el Movimiento Democrático Popular (MDP) y agrupaba a los partidos de la izquierda histórica: El Partido Comunista (PC) y el Partido Socialista (PS), a los cuales se sumó el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Su programa involucraba el derrocamiento de la dictadura, utilizando todas las formas de lucha (incluida la insurgencia armada) y la construcción de una Democracia Popular que introdujera reformas políticas, sociales y económicas de rasgos similares a los planteados por la UP en 1970¹⁰. La otra, representada por la Alianza Democrática (AD), tenía como referente hegemónico al Partido Demócrata Cristiano (DC) y a ella se sumaba una fracción, de matriz socialdemócrata, del PS y el antiguo Partido Radical (PR). Su programa político planteaba el término de la dictadura militar mediante la movilización social pero sin utilizar la lucha armada. Su meta era restaurar el sistema democrático vigente en Chile hasta antes del golpe militar de 1973¹¹. Ambas alternativas planteaban que un paso imprescindible para lograr sus objetivos era derogar la Constitución Política de 1980 a la cual se consideraba intrínsecamente antidemocrática.

En septiembre de 1986, el intento de ejecución de Augusto Pinochet por parte de un comando del Frente Patriótico Manuel Rodrí-

⁹ Las protestas populares del periodo 1983-1987 han sido ampliamente estudiadas. Al respecto véase DE LA MAZA, G., y GARCÉS, M.: *La explosión de las mayorías. Protesta nacional, 1983-1984*, Santiago de Chile, ECO, 1985; SALAZAR, G.: *Violencia política popular en las «grandes alamedas» (1947-1987)*, Santiago de Chile, SUR, 1990, pp. 368-393; WEINSTEIN, J.: *Los jóvenes pobladores en las protestas nacionales (1983-1984). Una visión sociopolítica*, Santiago de Chile, CIDE, 1989, pp. 24-65, y GUILLAUDAT, P., y MOUTERDE, P.: *Los movimientos sociales en Chile, 1973-1993*, Santiago de Chile, LOM, 1998, pp. 154-173.

¹⁰ MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO POPULAR: *Al pueblo de Chile: nuestra propuesta de lucha y unidad democrática*, texto mimeografiado, Santiago de Chile, MDP, enero de 1984.

¹¹ VALDÉS, G.: *Sueños y memorias*, Santiago de Chile, Taurus, 2009, pp. 287-329; BOENINGER, E., y SERRANO, M.: *La igual libertad*, Santiago de Chile, Uqbar, 2009, pp. 77-117, y OTTONE, E.: «Democratización y nueva hegemonía en Chile», en VVAA: *Siete ensayos sobre democracia y socialismo en Chile*, Santiago de Chile, VCETOR-Ediciones Documentas, 1986, pp. 137-164.

guez (FPMR) no sólo desató una violenta represión sobre el movimiento opositor, sino que también puso en evidencia, para todos los actores políticos chilenos y para quienes se preocupaban de la situación política en Chile desde el extranjero, que el desborde social y las actuaciones insurgentes se dirigían rápidamente hacia la generación de un escenario de «guerra de baja intensidad» como el que existía en esos momentos en Centroamérica, Perú y Colombia. De esta manera, al amparo de los buenos oficios del Departamento de Estado norteamericano e intermediado por la cúpula de la Iglesia católica chilena, se convocó a los representantes de los partidos políticos opositores (articulados en torno a la AD) y a los representantes políticos de la dictadura militar a concordar un gran Acuerdo Nacional que impidiera el desencadenamiento de una guerra civil, aislando políticamente a los grupos extremistas, que limitara temporalmente el mandato militar y que restaurara un difuso sistema democrático¹². Entre 1987 y 1988, las negociaciones llevadas a cabo entre ambos sectores devinieron en la aceptación por parte de los partidos democráticos del calendario político y del marco institucional definido por las autoridades militares. Por su parte, la dictadura, que aspiraba a prolongar su mandato político hasta 1998, aceptó a regañadientes el fallo adverso de las urnas en el plebiscito de 5 de octubre de 1988 y los resultados electorales de diciembre de 1989, que dieron como ganador al representante de la Concertación de Partidos por la Democracia (continuadora de la AD), Patricio Aylwin, entregando el gobierno en marzo de 1990¹³. Se abrió camino, de esta forma, la denominada Transición Política a la Democracia.

Transición e insurgencia: la irrupción de la insurgencia armada en Chile

Los dos componentes fundamentales de la construcción histórica latinoamericana del siglo XX, el desarrollismo económico y el popu-

¹² La búsqueda de acuerdos entre dictadura y oposición, promovida por la Iglesia Católica, se había iniciado en 1985 pero sus resultados, hasta 1986, habían sido estériles. Véanse, al respecto, RAMMSY, C. (ed.): *Iglesia y transición en Chile*, Santiago de Chile, Rehue, 1990, y CORREA, E., y VIERA-GALLO, J. A.: *Iglesia y dictadura*, Santiago de Chile, Ediciones Chile y América, 1986.

¹³ Véase BOENINGER, E.: *Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad*, Santiago de Chile, Andrés Bello, 1997, pp. 340-346.

lismo político, se encontraban, hacia mediados de la década de 1950, en su fase de agotamiento definitivo¹⁴. En este contexto, la Revolución Cubana vino a modificar, de manera profunda, la forma de hacer política en la región. En efecto, la llegada al poder de las columnas guerrilleras del Movimiento 26 de Julio transformó de manera significativa las líneas táctico-estratégicas de un segmento importante de la izquierda latinoamericana¹⁵. El principal impacto de la Revolución Cubana se produjo en el plano político y, a través de él, en el plano cultural. Efectivamente, el modelo cubano contribuyó de manera importante a definir las características centrales del programa revolucionario de la llamada *Nueva Izquierda*¹⁶. En consecuencia, la influencia de la Revolución Cubana no tardó en hacerse sentir en toda América Latina.

En el caso de Chile, los ideales y el modelo de acción política propuesto por la Revolución Cubana fue encarnado de manera temprana por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). El MIR irrumpió en la escena política nacional en el mes de agosto de 1965. En ese momento, un amplio y heterogéneo grupo de organizaciones revolucionarias asumió la tarea de construir un nuevo instrumento orgánico que, de acuerdo con sus perspectivas y orientacio-

¹⁴ Estos temas han sido ampliamente tratados por la historiografía latinoamericana. Un enfoque general para la región en BETHELL, L. (ed.): *Historia de América Latina*, vols. 12-16, Barcelona, Crítica, 1997-2002. Una mirada más general sobre esta problemática en DEL POZO, J.: *Historia de América Latina y El Caribe, 1825-2001*, Santiago de Chile, LOM, 2002, y HALPERIN DONGHI, T.: *Historia Contemporánea de América Latina*, Madrid, Alianza, 1993. Un enfoque centrado en las problemáticas políticas se encuentra en el volumen de POZZI, P., y SCHNEIDER, A. (comps.): *América Latina en el siglo XX. Entre el orden y la revolución*, Buenos Aires, Imago Mundi, 2004.

¹⁵ La influencia de la revolución cubana en la constitución de la denominada izquierda revolucionaria cuenta con múltiples trabajos; la mayoría de ellos centrados en las experiencias de cada país. Dos miradas contrapuestas sobre el fenómeno, pero con un prisma regional, son la de CASTAÑEDA, J.: *La utopía desarmada. Intrigas, dilemas y promesas de la izquierda en América Latina*, Buenos Aires, Ariel, 1994, y la de TENENBAUM, E. J.: *Movimientos populares en la historia de nuestra América*, Buenos Aires, COPPPAL-Editorial Sudamericana, 2006.

¹⁶ Este programa se encuentra claramente explicitado y abundantemente descrito en los textos de Ernesto Che Guevara. Los trabajos de Guevara se encuentran en la compilación de FERNÁNDEZ RETAMAR, R.: *Ernesto Che Guevara. Obra revolucionaria*, México, ERA, 1969. Una mirada general a los movimientos insurgentes latinoamericanos de las décadas de 1960 y 1970 en PEREYRA, D.: *Del Moncada a Chiapas. Historia de la lucha armada en América Latina*, Madrid, Ediciones de la Catarata, 1997.

nes, disputara la dirección del movimiento popular a la izquierda tradicional, en el proceso de lucha por la construcción del socialismo en Chile¹⁷.

El MIR planteaba como alternativa la insurrección popular armada como único camino para derrocar el régimen capitalista. Precisamente, una de las contribuciones teóricas y estratégicas más importantes del MIR al pensamiento revolucionario en Chile fue la introducción de las formas armadas de lucha como estrategia de enfrentamiento con el Estado y las clases dominantes¹⁸. A pesar del importante papel que desempeñó el MIR en el proceso de radicalización política del movimiento de masas, en la fase 1970-1973, su capacidad operativa para resistir el golpe de Estado de 1973 fue muy reducida¹⁹.

Inmediatamente después del golpe de Estado, las organizaciones de izquierda —y en particular el MIR— fueron objeto de una brutal política represiva, fenómeno que derivó, prácticamente, en su anulación como actor político²⁰. No obstante, a partir de 1978, y en el marco de la denominada «Operación Retorno», el MIR logró recuperar parte de su capacidad de intervención operativa instalando en el país

¹⁷ Para el historiador Luis Vitale, el MIR fue el resultado de un proceso de unificación iniciado por varios grupos desde comienzos de la década de 1960. Entre otros, el Partido Obrero Revolucionario (trotskista), la Vanguardia Revolucionaria Marxista —formada por ex militantes del Partido Comunista y del Partido Socialista, de orientación castrista—, el Movimiento Revolucionario Comunista (maoísta) y antiguos militantes anarquistas; VITALE, L.: *Interpretación marxista de la historia de Chile*, vol. 5, Barcelona, Fontamara, 1982, pp. 164-165, e íd.: *Contribución a la historia del MIR (1965-1970)*, Santiago de Chile, Ediciones del Instituto de Investigación de Movimientos Sociales Pedro Vuskovic, 1999, pp. 8-12. Cf. SANDOVAL, C.: *MIR (una historia)*, Santiago de Chile, Sociedad Editorial Trabajadores, 1990, p. 13. Sobre los contenidos de la propuesta programática del MIR, véase HERNÁNDEZ, M.: *El pensamiento revolucionario de Bautista Van Schouwen, 1943-1973*, Concepción, Escaparate, 2004, y MIR: «Declaración de principios», en *El Rebelde*, 1 de septiembre de 1965.

¹⁸ CERDA, L., y TORRES, I.: «La visión estratégica del Che y Miguel sobre la revolución latinoamericana», en NARANJO, P. (coord.): *Miguel Enríquez. Páginas de historia y lucha*, Estocolmo, Centro de Estudios Miguel Enríquez (CEME), 1999, p. 22. Una visión crítica de este enfoque se encuentra en VIDAL, H.: *Presencia del MIR. 14 claves existenciales*, Santiago de Chile, Mosquito, 1999.

¹⁹ Véase, al respecto, el contexto histórico elaborado para el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Cf. RETTIG, R. (coord.): *Informe de la Comisión... op. cit., passim*.

²⁰ RADRIGÁN, C., y ORTEGA, M. (comps.): *Miguel Enríquez: con vista a la esperanza*, Santiago de Chile, Escaparate, 1998, pp. 415-425.

cuadros político-militares formados en el exterior²¹. Estos cuadros formaron la denominada Estructura de Fuerza Central, una unidad operativa con un alto nivel intervención armada que, junto a las Milicias de la Resistencia Popular, contribuyeron notablemente a la reanimación de la lucha antidictatorial, especialmente a partir de las protestas populares iniciadas en mayo de 1983.

En este contexto surgieron, además, nuevos contingentes político-militares. Así, al calor de los debates internos desarrollados en torno a la derrota de la Unidad Popular en 1973, el PC comenzó a desarrollar una reflexión teórica y, luego, a poner en marcha una estrategia política sustancialmente diferente de aquella que había acompañado su devenir desde mediados de la década de 1930. Surge así la llamada Política de Rebelión Popular de Masas²². Este diseño suponía un proceso amplio de acumulación de fuerza social y política de carácter antidictatorial, que debía concluir en una insurrección general que derrocará a la dictadura y generara las condiciones para la conformación de un Gobierno Patriótico Provisional de Unidad Nacional²³. En este escenario, el movimiento de masas debía contar con un destacamento militar que acompañara dicho proceso. Este destacamento, concebido como el brazo armado del Partido, fue el FPMR. Desde su aparición pública, en diciembre de 1983, el FPMR desplegó una activa intervención política y militar, tanto en la protección de las movilizaciones de masas (a través de las llamadas Milicias Rodriguistas) como en la implementación de una serie de operaciones armadas de gran impacto nacional: la destrucción del tendido eléctrico, la ejecución de colaboradores de la dictadu-

²¹ El denominado *Plan 78* u *Operación Retorno* fue una iniciativa táctica diseñada por el MIR, que apuntaba a fortalecer la estructura militar del partido con la reinserción en el país de cuadros político-militares provenientes del exilio, fundamentalmente de Cuba. A partir de este contingente se pretendía iniciar una fase ofensiva realizando acciones de propaganda armada y golpeando objetivos militares estratégicos de la dictadura. Al respecto, véase PASCAL ALLENDE, A.: «Neltume es un paso. El objetivo: la guerrilla permanente en los campos», entrevista al secretario general del MIR, Andrés Pascal Allende, en *Revista Punto Final* (en la clandestinidad), Santiago de Chile, 1981.

²² QUIROZ, C.: «La política de la rebelión popular de masas», en LOYOLA, M., y ROJAS, J. (comps.): *Por un rojo amanecer. Hacia una historia de los comunistas chilenos*, Santiago de Chile, Impresora Valus, 2000, pp. 247-258.

²³ Un análisis histórico de los contenidos de la propuesta «frentista» en PÉREZ, C.: «Violencia y política en las publicaciones clandestinas bajo Pinochet: la palabra armada en el FPMR. Chile, 1983-1987», *Revista de Historia Social y de las Mentalidades*, 12-2 (2008), pp. 71-90.

ra, el secuestro de personalidades militares y el intento de magnicidio contra Augusto Pinochet en septiembre de 1986²⁴.

El fracaso de la política insurreccionalista en 1986, de la cual son hechos importantes el descubrimiento por parte de los aparatos de seguridad de la dictadura militar de la internación masiva de armas por la localidad litoral de Carrizal Bajo (Región de Atacama) y el fracaso del intento de ajusticiamiento de Augusto Pinochet, generó una profunda crisis en el interior del PC y, por extensión, en el FPMR. Como resultado de ella, la Comandancia del Frente, encabezada por Raúl Pellegrin Friedmann (conocido como *Comandante José Miguel*) rompió con el PC y comenzó a desarrollar una política militar propia, que pasó a denominarse en 1988 Guerra Patriótica Nacional²⁵.

Pero el proceso de evaluación de la fallida experiencia de la Unidad Popular convocó no sólo al Partido Comunista, sino al conjunto de la izquierda. Precisamente uno de los grupos políticos que con más intensidad vivió este proceso de autocrítica política fue el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU). De hecho, hasta la fecha, los trabajos más rigurosos que existen sobre la materia establecen que el MAPU fue un factor fundamental en el proceso de renovación democrática del pensamiento socialista en Chile²⁶. No obstante, dicho proceso estuvo jalonado por una serie de tensiones que dieron origen a las más variadas posturas políticas, desde aquellas que se comprometieron con el escenario institucional definido por la dictadura militar, hasta las que, por el contrario, optaron por la lucha armada para derrocar el sistema capitalista. Esta segunda opción fue la que orientó a los dirigentes que posteriormente fundaron el MAPU-Lautaro. Este conglomerado partidario comenzó a gestarse a finales de la década de 1970, en el interior de la Comisión Juvenil del MAPU, y se articuló en torno a la actividad que el partido desarrollaba entre las

²⁴ Las acciones armadas del FPMR en este periodo se encuentran ampliamente detalladas en el texto de SALDIAS, C.: *Nacer en primavera*, vols. 1 y 2, Santiago de Chile, Ediciones Rodriguistas, 1998 y 2003, respectivamente.

²⁵ La ruptura en el interior del FPMR y el desencadenamiento de la llamada Guerra Patriótica Nacional (GPN) se encuentran analizados en el texto de PALMA SALAMANCA, R.: *Una larga cola de acero. Historias del FPMR, 1984-1988*, Santiago de Chile, LOM, 2001.

²⁶ Al respecto, véase la tesis de doctorado de MOYANO BARAHONA, C.: *Microhistoria de la renovación socialista en el MAPU. Un partido, unos sujetos, nuestra transición a la democracia (1973-1989)*, Santiago de Chile, Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile, 2006.

comunidades cristianas de base de la zona sur y oeste de la ciudad de Santiago. En 1982, la Comisión Juvenil del MAPU formó el Movimiento Juvenil Lautaro (MJL)²⁷. De esta forma, la apuesta de este sector por desplegar una estrategia de carácter insurreccional para hacer frente a la dictadura militar y la tendencia a converger en el socialismo renovado del grueso de la dirección política del MAPU concluyeron con la escisión de ambos grupos en agosto de 1983.

Las primeras acciones operativas del MAPU-Lautaro se realizaron en el marco de las protestas populares contra la dictadura militar que se produjeron entre 1983 y 1987. En este escenario, el MAPU-Lautaro introdujo una serie de novedosas experiencias tácticas, justificadas en lo que ellos denominaban «la toma de las necesidades», y que consistían en copar los centros productivos y los vehículos de empresas de distintos sectores, con objeto de distribuir entre los pobladores de las villas periféricas calzado, alimentos, cervezas, material para la construcción de techumbres, preservativos, etcétera. Este tipo de acciones, más cercanas a los requerimientos del mundo popular, le permitieron al MAPU-Lautaro crecer especialmente entre los jóvenes desempleados o subocupados de las grandes ciudades del país. A partir de este modelo táctico se avanzó en una peculiar definición estratégica: «la toma de Chile», que suponía el desarrollo de una guerra insurreccional en la cual el componente fundamental no era el destacamento insurgente, sino el movimiento social de masas²⁸. El ascenso en la lucha popular durante este periodo y los crecientes niveles de violencia política que comienzan a experimentarse entre 1986 y 1987 estimularon en el MAPU-Lautaro la creación de su propio aparato militar. Así, en 1987, el partido creó las Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro (FRPL). De esta manera, mientras la insurgencia clásica (representada en el MIR) experimentaba un creciente desgaste como resultado del accionar represivo, y mientras la insurgencia nacida en

²⁷ Sobre la formación del MAPU-Lautaro, véanse MOYANO BARAHONA, C.: «La retórica de la renovación hasta su paroxismo: del MAPU renovado al Lautaro», *Revista de Historia Social y de las Mentalidades*, 12-2 (2008), pp. 123-147, y ÓRDENES HERMOSILLA, H.: *Jóvenes, rebeldes y armados. Teoría, identidad y praxis del MAPU-Lautaro*, Santiago de Chile, Informe de Seminario de Grado para optar al Grado de Licenciado en Historia, Universidad de Chile, 2007, pp. 122-127.

²⁸ FAURE BASCUR, E.: *Los locos del poder. Aproximación histórica a la experiencia del Movimiento Juvenil Lautaro*, Santiago de Chile, Informe de Seminario de Grado para optar al Grado de Licenciado en Historia, Universidad de Chile, 2006, pp. 34-41.

el seno del PC se resentía políticamente de su escisión de 1987, el MAPU-Lautaro, por el contrario, potenciaba su estructura orgánica y crecía entre la franja más radicalizada del mundo juvenil popular.

El conjunto de estas organizaciones insurgentes observaron con recelo el proceso de negociación, inaugurado en 1985, entre la oposición y los representantes políticos de la dictadura. Y en el momento de definirse el itinerario de la transición, tras el triunfo de la opción No en el plebiscito de octubre de 1988, se prepararon para dar continuidad a la lucha armada en Chile.

La transición y la herencia del pasado

El régimen democrático que inició la transición de Chile a la democracia lo hizo sobre las bases institucionales definidas por el régimen dictatorial y bajo la constante presión de una intervención militar restauradora. Los acuerdos políticos suscritos por la oposición democrática con la derecha pinochetista, a partir de 1985, contribuyeron a la generación de un escenario político para la década de 1990 signado por las insuficiencias sociales e institucionales y por un arraigado temor a las Fuerzas Armadas. Estos antecedentes son fundamentales a la hora de identificar el carácter del Estado en la etapa que se inaugura en 1990²⁹. Los acuerdos referidos garantizaron la continuidad del modelo económico neoliberal, por cuanto se impuso como amplio consenso (desde los socialistas renovados hasta los grupos conservadores) que éste había sido exitoso y que no era la disposición de ningún sector político racional restaurar el ineficiente *Estado de Bienestar* de los años setenta. A su vez, la política social, encapsulada en el principio de subsidiariedad del Estado, definió nuevos grupos focales, aisló el problema de la pobreza, pero no resolvió su condición estructural. Ello contribuyó a configurar una sensación de frustración y desencanto que gradualmente se fue extendiendo en el interior de la sociedad. De esta manera, junto a la percepción crítica respecto de las

²⁹ La transición de Chile a la democracia ha sido ampliamente estudiada por las ciencias sociales. Sobre este punto, véanse JOIGNANT, A. (ed.): *La Caja de Pandora: el retorno de la transición chilena*, Santiago de Chile, Planeta-Ariel, 1999; MOULIAN, T.: *Chile actual: la anatomía de un mito*, Santiago de Chile, LOM, 1997, y BOENINGER, E.: *Políticas públicas en democracia. Institucionalidad y experiencia chilena, 1990-2006*, Santiago de Chile, Uqbar-CIEPLAN, 2007.

insuficiencias de la política social, se empezó a profundizar la desafiliación respecto del sistema político democrático. Esto se hizo más evidente cuando los desbordes sociales originados en las injusticias del sistema se enfrentaron con una política represiva no exenta de abuso y arbitrariedad. Es precisamente en este contexto en el cual debemos situar la respuesta política que la insurgencia armada desarrolló en Chile entre 1988 y 1994³⁰.

Efectivamente, la política pública en materia social, orientada a liquidar las profundas inequidades que generó el gobierno militar, intentó privilegiar a los sectores sociales más dañados y expuestos: los cordones de marginalidad periférica en las grandes ciudades, los jóvenes, los ancianos y las mujeres. Pero los esfuerzos desplegados no lograron resolver rápida y eficientemente los problemas. Si bien la extrema pobreza (recursos insuficientes para resolver las necesidades básicas), experimentó una reducción importante, la pobreza en sentido amplio (deterioro de las condiciones de vida) se mantuvo en rangos altos. De la misma manera la profunda brecha que separa a ricos y pobres se tornó cada vez más amplia debido a la inexistencia de una política de redistribución efectiva de la riqueza³¹. Los pobres de la ciudad, los jóvenes, los ancianos y las mujeres jefas de hogar continuaron siendo los sectores sociales más vulnerables de la población. Pero con un factor subjetivo asociado, muchos de ellos perdieron las esperanzas en la alegría que venía³² y la confianza en el sistema democrático; por lo anterior algunos de ellos no dudaron en buscar en la transgresión social y delictiva una situación mejor a sus precarias condiciones de vida³³.

³⁰ Una visión crítica, construida desde el interior de la Concertación, respecto de la transición y su incidencia en el desarrollo de la violencia política, la expuso el dirigente demócratacristiano Andrés Aylwin Azocar (hermano del presidente de la República). Véase AYLWIN, A.: «Factores de violencia política», *Revista Análisis*, 426 (28 de septiembre-12 de octubre de 1992), pp. 16-17.

³¹ Sobre la evolución de la política social y su impacto en la reducción de la pobreza, véanse MIDEPLAN: *Programas sociales: su impacto en los hogares chilenos*, Santiago de Chile, MIDEPLAN, 1993, y VALDÉS, A.: «Pobreza y distribución del ingreso en una economía de alto crecimiento: Chile, 1987-1995», *Estudios Públicos*, 75 (1999), pp. 5-47.

³² «Chile: La alegría ya viene» fue la consigna central utilizada por la oposición a la dictadura militar en la campaña política que precedió al plebiscito realizado el 5 de octubre de 1988 y que culminó con el triunfo de la opción No.

³³ Cf. VARGAS OTTE, G.: «Delincuencia en Chile: tendencia y desafíos», *Revista Paz Ciudadana*, 1 (2005), pp. 6-11, y RAMOS, M., y GUZMÁN, J. A.: *La guerra y la paz ciudadana*, Santiago de Chile, LOM, 2000.

Cabe consignar, además, que durante el periodo 1988-1994, los acuerdos políticos sancionados previamente involucraron la aceptación tácita (al menos) del Decreto Ley de Amnistía de 1978³⁴. Circunstancia que, prácticamente, impidió la aplicación de todo tipo de sanción a los principales responsables de las violaciones de los derechos humanos cometidas en el país durante la dictadura militar. En consecuencia, la sensación de impunidad que rodeaba a los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de seguridad (activos o en retiro), responsables intelectuales de la matanza, o incluso a los simples agentes de seguridad que ejecutaron las disposiciones de sus jefes, impuso la lógica de que la fuerza es el método más expeditivo para conseguir un objetivo. Es más, las Fuerzas Armadas y los aparatos de seguridad continuaron reivindicándose a sí mismos, durante esos años, como un ejército victorioso, que no tenía y que, por lo tanto, no asumía culpas; por el contrario, demandó sistemáticamente el agradecimiento de la sociedad por haber evitado la «dictadura comunista»³⁵. Por su parte, el eje articulador de la institucionalidad política heredada de la dictadura militar, la Constitución Política de 1980, tampoco experimentó cambios sustantivos. Y ello porque la Ley Orgánica Constitucional, que contempla los mecanismos para su modificación requiere, a su vez, de altos quórum parlamentarios (3/5)³⁶.

³⁴ Al respecto, véase el Decreto-ley núm 2.191, de 18 de abril de 1978, del Ministerio del Interior, Santiago de Chile, 1978. La evolución jurídica de la Amnistía en NOGUEIRA ALCALÁ, H.: «Decreto-ley de Amnistía 2.191, de 1978, y su armonización con el Derecho internacional de los derechos humanos», *Revista de Derecho (Valdivia)*, 18-2 (2005), pp. 107-130.

³⁵ La respuesta del ejército al Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación resulta particularmente reveladora: «Para una parte importante de la nación, que comprendió la gesta del 11 de septiembre de 1973, el verdadero “nunca más” debe provenir, ante todo, de aquellos que con sus distintos experimentos ideológicos llevaron al país a una ineludible reacción de legítima defensa ante la abierta ilegitimidad en que se había incurrido. Se requiere que “nunca más” se pretenda, en Chile, poner en práctica un proyecto político de la naturaleza y alcances del representado por Unidad Popular. De lo contrario, será imposible impedir la experiencia que el legítimo empleo de la fuerza por sus propias características conlleva o hace difícil evitar» («Respuesta del Ejército de Chile al Informe Rettig», en *Documentos de La Nación*, 18 de noviembre de 2004).

³⁶ Un enfoque diacrónico sobre la trayectoria institucional del país en CRISITI, R., y RUIZ-TAGLE, P.: *La república en Chile: teoría y práctica del constitucionalismo republicano*, Santiago de Chile, LOM, 2007. Un recurso institucional complementario a la Constitución política continúa siendo, hasta la fecha, la Ley Electoral. Este instrumento define un sistema de elección de autoridades (parlamentarias y locales) bastan-

A pesar de todo lo anterior, las autoridades políticas que asumieron la dirección del Estado en 1990 eran particularmente optimistas respecto de la desaparición de la violencia política en el país. Le asignaban especial relevancia al hecho que la dictadura militar no había resistido su desalojo del poder y confiaban plenamente en la adscripción de la sociedad a los requerimientos propios de la reorganización de la institucionalidad democrática. Sin embargo, las organizaciones insurgentes no estuvieron disponibles para un inmediato «adiós a las armas». Por el contrario, los antecedentes previamente enunciados constituyeron el núcleo fundamental de la argumentación política que, a juicio de las mismas, legitimaba el ejercicio de la violencia³⁷.

La lucha insurgente en la transición temprana

A comienzos de la década de 1990, tres organizaciones político-militares continuaban enarbolando la estrategia de la lucha armada como recurso político: el MIR, el FPMR y el MAPU-Lautaro³⁸. Todas ellas gozaban, hasta la etapa final de la dictadura militar, de un relativo respaldo social, especialmente entre los sectores más pobres de la

te peculiar. Los partidos o coaliciones deben presentar listas con candidatos para dos escaños por distrito, circunscripción o municipio (ayuntamiento). El sistema tiene en cuenta tanto los votos dirigidos a la lista (partido), como los votos individuales (candidato). El primer escaño lo obtiene el partido o coalición que cuente con más votos. Pero como hay dos candidatos por área, el partido o coalición que ocupe el primer lugar en la votación debe obtener el doble de votos que su adversario para ganar los dos escaños. De este modo el punto de corte que un partido o coalición debe alcanzar para obtener al menos un escaño es el 33,4 por 100 de los sufragios, mientras que para lograr los dos necesita obtener el 66,7 por 100. De ahí que el sistema favorezca al segundo partido o coalición en la disputa electoral. Al respecto, véase GUZMÁN, E.: «Reflexiones sobre el sistema binominal», *Estudios Públicos*, 5 (1993), pp. 303-324.

³⁷ Cabe señalar que, en el momento de asumir el gobierno Patricio Aylwin Azocar (marzo de 1990), permanecían en prisión más de 400 presos políticos. Todos ellos purgaban largas penas de prisión, debido a las condenas que les aplicaron los tribunales militares y civiles de la dictadura. Al concluir su periodo presidencial, en marzo de 1994, todos ellos habían sido liberados en el marco de la aplicación de las llamadas *Leyes Cumplido*. Un conjunto de medidas sancionadas por el Congreso Nacional, en base a un proyecto elaborado por el jurista demócratacristiano Francisco Cumplido, que suponía rebaja de condenas en algunos casos y conmutación de penas de presidio por extrañamiento, en las situaciones más complejas.

³⁸ Un análisis de conjunto en ROSAS ARAVENA, P.: *Rebeldía, subversión y prisión política. Crimen y castigo en la transición chilena, 1990-2004*, Santiago de Chile, LOM, 2004.

población, derivado del carácter abierto, y en muchas circunstancias épico, que adquirió la lucha insurgente³⁹.

La situación del MIR, a comienzos de la década de 1990, era particularmente compleja. La crisis interna iniciada en 1984, como consecuencia del fracaso de la «Operación Retorno» y de la muerte o encarcelamiento de cientos de militantes, se cerró en julio de 1986 con la división del partido en dos grupos principales, que definieron líneas estratégicas diferentes⁴⁰. La continuidad histórica de la estrategia de lucha armada, que se encuentra en la base del pensamiento mirista, quedó representada por la fracción dirigida, en aquel entonces, por el secretario general de la organización, Andrés Pascal Allende. De esta organización se escindiría a finales de 1987 la Comisión Militar que, bajo el liderazgo de Hernán Aguiló Martínez, paso a convertirse en el principal referente insurgente del mirismo. Pero este proyecto (al igual que aquel representado por el MIR político) se hundió definitivamente a comienzos de la década de 1990, en el marco del agotamiento programático de la izquierda chilena, de la consolidación de la estrategia de transición negociada y de la liquidación del socialismo real representado por la Unión Soviética y los países de Europa del Este⁴¹. Los últimos grupos del MIR chileno alzados en armas contra la democracia, como la Comisión Militar (MIR-CM), el Ejército Guerrillero de los Pobres (MIR-EGP) o el Destacamento Mirista Pueblo en Armas (DMPA), que alcanzaron a realizar algunas expropiaciones financieras, atentados contra partidarios de la dictadura y acciones de propaganda armada, fueron rápidamente encuadrados y liquidados por los aparatos de seguridad del Estado.

³⁹ Resulta complejo dimensionar la adhesión que las organizaciones armadas tuvieron entre la población, debido a que estamos en presencia de organizaciones clandestinas que carecen de registro de militantes. No obstante, la profusión de rayados en las calles suscritos por estas organizaciones y la presencia de lienzos y banderas alusivas a las mismas en las manifestaciones públicas demuestra que su legitimidad política era bastante importante. Por último, se puede destacar que la mayoría de los militantes de estos partidos que resultaron encarcelados durante la dictadura eran de extracción obrera.

⁴⁰ Sobre la crisis del MIR en el periodo 1986-1987, véase MARTÍNEZ, M.: *La experiencia política de los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR): motivaciones, práctica partidaria y división de la militancia*. Chile (1973-1988), Santiago de Chile, Seminario de Grado para optar al Grado de Licenciado en Historia, Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile.

⁴¹ RIVAS, P: «Miguel Enríquez y la crisis de la conciencia efímera», en NARANJO, P. (coord.): *Miguel Enríquez. Páginas de historia y lucha*, Estocolmo, Centro de Estudios Miguel Enríquez (CEME), 1999, p. 52.

El grupo mirista más activo durante la fase de transición temprana fue el MIR-Comisión Militar. Este grupo, surgido de las sucesivas escisiones que vivió el MIR inmediatamente después de la crisis orgánica de 1986, se mantuvo en armas hasta 1992. Ya en octubre de 1988, justo después del plebiscito en el cual fue derrotada la dictadura militar, esta organización manifestaba su oposición a cualquier tipo de acuerdo político que supusiera la continuidad del modelo económico y político impuesto por los militares. En su «Propuesta de Paz» sostenían que no se podría alcanzar la pacificación del país manteniendo la represión como instrumento de control social, el modelo económico de mercado y la institucionalidad política de la dictadura. Más enfáticos eran respecto de la problemática de derechos humanos cuando indicaban que no habría paz si se consagraba la impunidad para quienes habían ejecutado, torturado y hecho desaparecer personas⁴².

Esta perspectiva se hacía cargo claramente de los problemas derivados de la instalación de la dictadura militar y del proyecto político y económico que ésta representaba. Evaluaba que el modelo de reorganización neoliberal de la economía y la sociedad y el costo político de dicho proceso (las violaciones a los derechos humanos) no serían alterados por la Concertación. Pero más allá de ello, este sector continuaba considerando la lucha armada como un componente fundamental de toda estrategia política de transformación⁴³. El núcleo fundamental de la propuesta mirista era el reagrupamiento de los revolucionarios. Ello se sustentaba en un diagnóstico optimista de la movilización social de masas y en el reconocimiento de la capacidad operativa de las organizaciones revolucionarias surgidas durante la dictadura⁴⁴.

⁴² MIR-CM, en *El Combatiente*, 4 (1988), p. 2.

⁴³ *Ibid.*, 6 (1989), p. 4.

⁴⁴ No obstante, las principales acciones armadas del mirismo en esta etapa conllevaron reveses decisivos. Tras el exitoso atentado con explosivos contra el jefe del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), Julio Benimelli Ruiz, el 26 de enero de 1988, se sucedieron una serie de fracasos operativos, entre los cuales destacan la muerte de Araceli Romo y Pablo Vergara (dirigentes del MIR-CM), el 5 de noviembre de 1988, mientras colocaban una bomba en las antenas repetidoras de televisión del cerro Mariposas en Temuco, y el fallecimiento, en similares circunstancias, de Gloria Rivas Avello y Miguel Ángel Silva Soto, el 24 de abril de 1991, en la ciudad de Viña del Mar (su objetivo era la residencia del vicepresidente del Senado, el militante de la UDI y empresario naviero, Beltrán Urenda Zegers). Por último, el 1 de diciembre de 1993 muere en un enfrentamiento con carabineros en la población El Castillo, comuna de La Pintana, el dirigente del MIR, José Araneda Suazo, que había

Cabe preguntarse, entonces, ¿cómo leían estas organizaciones el proceso de transición política que comenzaba a consolidarse después de las elecciones presidenciales de 1989 (que dieron el triunfo al candidato de la Concertación Patricio Aylwin Azocar)? Y, en particular, ¿cómo evaluaban el importante apoyo popular a dicho proceso? Sobre este punto, el análisis de la izquierda insurgente enfatizaba dos aspectos fundamentales. Por una parte, la ausencia de una «alternativa popular y revolucionaria» y, por otra, «la claudicación y subordinación de la izquierda (tradicional) a la burguesía»⁴⁵. Este planteamiento consolidó en la militancia insurgente el imaginario de la ausencia de diferencias profundas entre el proyecto de continuidad pinochetista y el modelo de democratización esbozado por la Concertación⁴⁶. Ambos conglomerados, a juicio de estas organizaciones, representaban los intereses del «imperialismo» y del «gran capital financiero» y sólo discrepaban respecto de las formas específicas que debía asumir el modelo de dominación⁴⁷. La paradoja radica en que fue precisamente esta lectura la que desvinculó gradual pero sistemáticamente a estos grupos de la base social sobre la que se habían construido desde comienzos de la década de 1980.

El caso del FPMR es diferente. Si bien la crisis política detonada a finales de 1986 en el interior del PC (derivada del fracaso de la política de rebelión popular) conllevó el fraccionamiento de su aparato armado en 1987, no es menos efectivo que el núcleo fundamental en el que descansaba la capacidad operativa del FPMR se mantuviera prácticamente intacto hacia 1988⁴⁸. Ello le permitió a la fracción escindida del PC (el FPMR-Autónomo), liderada por Raúl Pellegrin, desplegar un activo quehacer militar entre 1988 y 1992. No obstante, el peso ideológico y cultural del PC mantuvo una significativa

participado en el atentado contra el intendente de Santiago, el general del ejército Carol Urzua, en 1983.

⁴⁵ MIR-CM, en *El Combatiente*, 11 (1989), pp. 1-3.

⁴⁶ El programa de gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia para las elecciones presidenciales de diciembre de 1989, en ORTEGA, E., y MORENO, C. (comps.): *¿La Concertación desconcertada? Reflexiones sobre su historia y su futuro*, Santiago de Chile, LOM, 2002, pp. 171-214.

⁴⁷ Estos tópicos se encuentran ampliamente desarrollados en MIR-CM: *Resoluciones del II Congreso del MIR-CM*, Chile, junio de 1990.

⁴⁸ La crisis y posterior división del FPMR son evaluados por el comandante Raúl Pellegrin en el documento *Comunicado del FPMR: cuando la separación*, Chile, junio de 1987.

incidencia en las definiciones tácticas y estratégicas del Frente. Es por ello que, hasta la adopción de la Estrategia de Guerra Patriótica Nacional (GPN), en octubre de 1988, el FPMR-A, continuó definiendo el componente armado de la lucha política como un aspecto auxiliar en el proceso de derrocamiento de la dictadura y, subsecuentemente, en la creación de un Gobierno Provisional de Unidad Nacional⁴⁹.

No obstante, el desarrollo de la contingencia política llevó al FPMR-A a definir de manera apresurada un sello distintivo. Fuertemente influenciada por el liderazgo de Raúl Pellegrín y por la experiencia compartida en la lucha guerrillera centroamericana, la Dirección Nacional del FPMR-A elaboró, primero, el documento conocido como «Acerca del Rediseño» (1988), en el cual se especifica que el referente deja de ser el aparato militar del PC y pasa a convertirse en una vanguardia político-militar, y, más tarde, dio a conocer el documento que explicita la nueva estrategia política: la «guerra patriótica nacional»⁵⁰. ¿Cuáles son entonces los elementos contenidos en esta propuesta que proyectan el quehacer armado del FPMR-A durante los primeros años de la década de 1990? Al igual que los sectores radicalizados en el MIR, la dirección del FPMR-A estableció en el mes de abril de 1988 que el plebiscito que se realizaría en octubre de ese mismo año, independiente de los resultados que podían arrojar las urnas, sólo favorecería la continuidad del modelo de dominación impuesto por la dictadura militar y la burguesía monopólico-financiera⁵¹. Un

⁴⁹ La estrategia política del PC y del FPMR hasta 1987, en QUIROZ, C.: «La política de la rebelión...», *op. cit.*, pp. 261-275, y RIQUELME, A.: *Rojo atardecer. El comunismo chileno entre dictadura y democracia*, Santiago de Chile, DIBAM, 2009, pp. 137-146.

⁵⁰ Sobre la experiencia internacionalista de los dirigentes del FPMR-A, véase PÉREZ, C.; BONNEFOY, P., y SPOTORNO, A.: *Internacionalistas: chilenos en la revolución popular sandinista*, Santiago de Chile, Brigada 30 Aniversario de la Revolución Popular Sandinista-Editorial Latinoamericana, 2009. Respecto a las readecuaciones en la línea política del frente, véase FPMR: *Acerca del rediseño*, Chile, 1988.

⁵¹ En una conferencia de prensa clandestina, concedida en enero de 1990, la dirección nacional del FPMR-A señaló: «Nuestra estrategia no es una consigna. Es un camino largo que se va nutriendo de acuerdo a las características particulares de cada momento. Nuestra estrategia sobrepasa esta etapa de Gobierno, incluso la entiende como un momento durante el cual tenemos que generar condiciones para avanzar en el plano de la conciencia social, de la organización política general y en el fortalecimiento de las organizaciones sociales». VALDÉS, J.: «Pinochet está sentenciado. Para el Frente Patriótico Manuel Rodríguez la guerra continúa», *Revista Hoy*, 654 (29 de enero-4 de febrero de 1990), pp. 11-12.

eventual recambio en la dirección del aparato del Estado por parte de la Concertación era subestimada ya que se consideraba que constituía una «salida burguesa» a la crisis política de la dictadura y, por lo tanto, una «perpetuación del sistema»⁵².

Pero la GPN no fue, en estricto rigor, un diseño estratégico largamente elaborado. Fue una reacción frente a la crisis orgánica del comunismo y una acelerada puesta en escena de la capacidad y experiencia militar acumulada a lo largo de la década de 1980. Por ello, el diseño debía ser rápidamente probado en la acción. Así, el primer paso de la GPN debía ser su irrupción, y a ese efecto se determinó ocupar, entre el 21 y el 22 de octubre de 1988, cuatro poblados rurales en el área precordillerana de la zona central (La Mora, Aguas Grandes, Pichipellahuén y Los Queñes), con objeto de generar las condiciones para la construcción gradual del «ejército del pueblo». No obstante, uno de los destacamentos del FPMR-A, precisamente el liderado por Raúl Pellegrin y por Cecilia Magni, fue cercado por fuerzas del ejército y de carabineros, y los dos dirigentes fueron capturados, posteriormente asesinados y sus cuerpos arrojados al Río Tinguiririca⁵³.

Después de este temprano fracaso, el FPMR-A continuó desarrollando de manera sistemática una serie de actuaciones insurgentes en algunas zonas urbanas, destacando las acciones de ajusticiamiento sobre agentes de la dictadura, sindicados como responsables de violaciones de los derechos humanos⁵⁴. Uno de los hechos más emblemáticos de esta etapa fue el intento de asesinato que el FPMR-A llevó a cabo en contra del ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, Gustavo Leigh Guzmán, que además fue miembro, entre 1973 y 1978, de la Junta Militar de Gobierno. Leigh fue tiroteado en una oficina de corretaje de propiedades de Santiago el 21 de marzo de 1990, sólo diez días después de que asumiera el gobierno Patricio Aylwin. Si bien el ex militar recibió heridas de gravedad, logró sobrevivir al aten-

⁵² FPMR: *La Guerra Patriótica Nacional*, Chile, 1988.

⁵³ VILLARROEL, G.: «Extremismo: la aventura de los pañuelos rojos», *Revista Hoy*, 589 (31 de octubre-6 de noviembre de 1988), pp. 15-16.

⁵⁴ Para el vocero del FPMR-A, el prisionero político Vasily Carrillo, «si no se resuelven [la violaciones a los derechos humanos] por la vía de la verdad, la justicia y el castigo a los criminales, nosotros vamos a seguir usando el derecho legítimo a la justicia popular». En MENDOZA, C.: «El vocero del Frente Autónomo en la cárcel, Vasily Carrillo, dijo a *Hoy* que las últimas acciones armadas no son más que un llamado de alerta al gobierno de Aylwin», *Revista Hoy*, 670 (21-27 de mayo de 1990), p. 27.

tado. Gustavo Leigh era conocido en la izquierda chilena como uno de los artífices del golpe de Estado de septiembre de 1973 y como uno de los responsables de las violaciones de los derechos humanos en la primera etapa de la dictadura. A pesar de lo anterior, jamás había sido sancionado por la justicia chilena⁵⁵.

El declive del FPMR-A se inició con el asesinato del senador y dirigente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jaime Guzmán Errázuriz, el 1 de abril de 1991. Esta acción conmovió profundamente a la novel democracia. Desde la derecha y desde la filas del ejército se presionó sistemáticamente al gobierno para incorporar a los militares a la lucha contra el terrorismo, situación que generaba recelo a nivel del ejecutivo⁵⁶. Más tarde, el secuestro del empresario Cristián Edwards del Río, hijo del dueño de la cadena periodística *El Mercurio* (entre el 9 de septiembre de 1991 y el 1 de febrero de 1992), acentuó el cerco policial sobre el grupo insurgente. Hacia 1994, cientos de sus militantes se encontraban encarcelados y doce habían muerto en enfrentamientos (efectivos o supuestos) con la policía.

El MAPU-Lautaro, al igual que el FPMR-A, se encontraba hacia 1988 en una fase expansiva de su acción armada. Especial relevancia adquirió el MJL, que había alcanzado un importante grado de inserción entre los jóvenes de las poblaciones populares de las principales ciudades del país. Por ello, la actuación miliciana, expresada en expropiaciones de bienes de consumo (en supermercados, vehículos de transporte de alimentos, farmacias, etcétera) y en la posterior distribución de los recursos en las poblaciones y los permanentes ataques contra cuarteles de carabineros en los arrabales urbanos, se con-

⁵⁵ SOTO, M. I.: «El desafío de la violencia. Y no había tregua. Atentado al general Leigh pone a prueba al nuevo gobierno a sólo diez días de su asunción», *Revista Hoy*, 662 (26 de marzo-1 de abril de 1999), pp. 5-6. Otras acciones del FPMR, de gran repercusión pública, fueron las ejecuciones de Roberto Fuentes Morrison (9 de junio de 1989), más conocido como el Wally, ex militante del Frente Nacionalista Patria y Libertad y agente del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), sindicado como responsable de desapariciones forzadas y asesinatos políticos, y del coronel de carabineros, Luis Fontaine Manríquez (12 de mayo de 1990), responsable de la muerte por degüello de tres dirigentes públicos del PC en marzo de 1985.

⁵⁶ Véanse, al respecto, POZO, F.: «Desafío terrorista: la doble batalla de la democracia», *Revista Análisis*, 377 (8-14 de abril de 1991), pp. 8-10; DÁVILA, L.: «Asesinato de Guzmán. El forzoso cambio de libreto», *Revista Hoy*, 716 (8-14 de abril de 1991), pp. 9-10, y MARTORELL, F.: «Violencia: apretando los dientes», *Revista Análisis*, 380 (29 de abril-5 de mayo de 1991), pp. 14-15.

virtieron en una experiencia cotidiana en los primeros años de transición democrática.

Los lautaristas consideraban que el triunfo de la opción No en el plebiscito de octubre de 1988 era el resultado del proceso de negociación entre la dictadura y la oposición burguesa y que, en consecuencia, el recambio burgués sólo favorecería la continuidad de la explotación capitalista y la consagración del Estado policial. Frente a ello, sólo cabía insistir en el enfrentamiento armado para impedir la concreción de ese recambio burgués y reabrir el proceso de movilización popular para conseguir la toma del poder. Consecuente con esta postura, el MAPU-Lautaro radicalizó las resoluciones adoptadas en su Tercer Congreso (1987), que habían priorizado un despliegue estratégico en torno a lo que los lautaristas denominaban la «guerra insurreccional de masas»⁵⁷.

Pero el MAPU-Lautaro incorporó un elemento nuevo a sus actuaciones insurgentes: una estética disruptiva que se expresó tanto en los objetivos de sus acciones (asaltos a farmacias y distribución de preservativos en las poblaciones, entre otras manifestaciones), como en el creciente protagonismo que las mujeres y lo femenino alcanzaban en la representación simbólica lautarina. Una de las alegorías más recurrentes en los panfletos del Lautaro muestra a una mujer semidesnuda que empuña una metralleta y convoca «A Tomarnos Chile». Esta ruptura estética también se expresó en las construcciones discursivas, que se alejaban significativamente de la retórica marxista, propia de las organizaciones castro-guevaristas, y remitían a una suerte de nihilismo lingüístico nuevo en la política chilena. De esta manera, la caracterización del «bloque dominante» (marxismo clásico), pasa a denominarse en el discurso lautarista: «Democracia cartucha» y «gobierno de eunucos», por cuanto se asocia con un grupo dirigente incapaz de dar satisfacción a las demandas y anhelos de las clases populares⁵⁸.

Una de las acciones más espectaculares realizadas por las FRPL fue el rescate desde el Hospital Sótero del Río, en la ciudad de Santiago, del prisionero lautarista Marco Ariel Antonioletti. En esta acción, llevada a cabo el 14 de noviembre de 1990, resultaron muertos cuatro gendarmes que custodiaban al detenido y un carabiniere que intentó impedir la acción. Una mujer (Marcela Rodríguez) integrante del comando resultó herida y, más tarde, el prisionero rescata-

⁵⁷ MAPU-Lautaro: *Tercer Congreso Partido MAPU*, Chile, 1987.

⁵⁸ ÓRDENES HERMOSILLA, H.: *Jóvenes, rebeldes y armados...*, op. cit., pp. 166-167.

do fue asesinado por la Policía de Investigaciones en una emboscada en la zona poniente de Santiago⁵⁹. Una de las últimas acciones del MAPU-Lautaro y la que probablemente define la derrota político-militar del mismo fue el frustrado asalto a la sucursal Apoquindo del Banco O'Higgins, llevado a cabo el 21 de octubre de 1993. En el asalto murió un guardia de seguridad del Banco, que intento oponer resistencia al atraco. Posteriormente, cuando los lautaristas intentaron replegarse en un autobús de la locomoción colectiva, éste fue cercado por funcionarios de carabineros, que al disparar indiscriminadamente contra el vehículo, dieron muerte a tres lautaristas y a cuatro pasajeros del vehículo de transporte. Después de esta sangrienta acción, el MAPU-Lautaro experimentó un acelerado proceso de descomposición. Al igual que el FPMR-A, cientos de sus militantes fueron encarcelados y unos doce resultaron muertos.

Transición y accionar contrainsurgente

Las complejidades que la continuidad de las actuaciones insurgentes impuso a la nueva administración democrática no se resolvieron de una forma rápida y efectiva. Por el contrario, en los primeros dos años de administración civil es posible observar cierta confusión y desconcierto⁶⁰. La confusión proviene, sobre todo, de la ausencia de un sistema de seguridad lo suficientemente sólido como para procesar la información y definir nuevas orientaciones en el quehacer represivo. Esto se relaciona con el hecho de que la seguridad del Estado durante los dieciséis años de la dictadura había estado en manos de organismos especializados (como la DINA, CNI y DICOMCAR,

⁵⁹ *El Mercurio*, Santiago de Chile, 15 de noviembre de 1990. Otras acciones de gran impacto político llevadas a cabo por el MAPU-Lautaro fueron el asesinato del prefecto de la Policía de Investigaciones de Concepción, Héctor Sarmiento, perpetrado el 15 de marzo de 1991, y el ataque a la guardia personal del intendente de Santiago, Luís Pareto (10 de septiembre de 1992), enfrentamiento en el que pierden la vida tres agentes de la policía de investigaciones y uno de los militantes del Lautaro.

⁶⁰ En 1990 el ministro secretario general de gobierno, Enrique Correa, refiriéndose a la aplicación de indultos presidenciales a los presos políticos recluidos por la dictadura, sostenía: «Suponemos que el clima político que hemos creado en el país es suficientemente estimulante como para inhibir la violencia. No tenemos ninguna idea preconcebida respecto de que alguno de los indultados pueda caer en violencia nuevamente». GRUNEFELD, M.: «La entrevista: Enrique Correa: existen terroristas presos», *Revista Qué Pasa*, 991 (5-12 de abril de 1990), pp. 14-15.

entre otros), dependientes de las Fuerzas Armadas y, en menor medida, del Cuerpo de Carabineros, a los cuales el sistema democrático, en primera instancia, se niega a recurrir. Ello conduce a la sospecha equivocada de que las acciones insurgentes provienen de grupos de ultraderecha o a resabios de los organismos de seguridad del régimen anterior, empeñados en una campaña desestabilizadora de la reciente institucionalidad democrática⁶¹. De esta manera, junto a grupos como el MIR-CM, el FPMR-A y el MAPU-Lautaro, se señalan también como responsables de las acciones subversivas a grupos ultraderechistas como el Comando 11 de Septiembre, el Frente Nacionalista de Combate y al Comando Mártires del 73, entre otros. Cabe señalar que a lo largo del periodo en estudio no ha sido posible observar participación alguna de estos grupos u otros de similar naturaleza en hechos de violencia política.

La reciente y dura experiencia de violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de los organismos policiales del Estado hacía que las nuevas autoridades fueran refractarias a la formación de un organismo especializado en el combate contra la insurgencia⁶². Al respecto, el dirigente demócratacristiano y senador de la República Andrés Zaldívar sostenía, en 1990, que la apuesta del gobierno era la «derrota política del terrorismo», lo que conllevaba el aislamiento de quienes utilizaban la violencia como instrumento de la política o de quienes pretendían utilizarla para hacer justicia por cuenta propia⁶³. Al efecto, apostaba por establecer un consenso político amplio de todos los sectores políticos para resolver el problema del terrorismo mediante la ley⁶⁴. Sin embargo, las señales de alerta sobre las peligro-

⁶¹ POZO, F.: «Violentísimo: ¿Quién tira la primera piedra?», *Revista Análisis*, 333 (28 de mayo-3 de junio de 1990), pp. 10-11.

⁶² Los primeros pasos de las nuevas autoridades se orientaron a la búsqueda de apoyos en el exterior, particularmente entre los países de Europa occidental, para acceder a recursos materiales y capacitación profesional en la lucha contra la subversión. Véase al respecto una entrevista al subsecretario del Interior, el demócratacristiano Belisario Velasco, en 1990. RODRÍGUEZ, A.: «Belisario Velasco. Hay orden, paz y seguridad», *Revista Hoy*, 663 (2-8 de abril de 1990), pp. 8-9.

⁶³ ROJAS, J.: «Conversando con Andrés Zaldívar: la derecha no tiene autoridad moral para achacarnos al terrorismo», *Revista Análisis*, 333 (8 de mayo-3 de junio de 1990), pp. 25-27.

⁶⁴ Al cumplirse un año de gobierno democrático (marzo de 1991), el presidente Patricio Aylwin anunció que una de las principales preocupaciones para ese año sería el «combate» contra la delincuencia y el terrorismo. Este último era definido como una conducta netamente «delictual». El ministro del Interior de la época, Enrique

sas proyecciones del fenómeno comenzaron a insinuarse tempranamente. Sorprende, incluso, que desde las filas de la prensa que combatió la dictadura surgieran las primeras voces de alarma. Fue de hecho Felipe Pozo, uno de los periodistas más perseguidos por la dictadura, quien hizo presente la situación. En una columna publicada en la *Revista Análisis*, de abril de 1990, señalaba que la violencia política había aparecido, bajo la forma de disturbios callejeros, el mismo día que Patricio Aylwin daba inicio al primer gobierno democrático. Posteriormente, el atentado de comienzos de abril contra el ex miembro de la Junta Militar, Gustavo Leigh, había puesto de manifiesto la gravedad del fenómeno. No obstante, apelaba a que la violencia fuera aislada «con las armas de la democracia»⁶⁵. En una postura más radical, el analista político demócratacristiano Genaro Arriagada señalaba en 1991 que el gobierno de la Concertación debía ser implacable en su lucha contra el terrorismo⁶⁶. Esta nueva actitud para hacer frente a las acciones insurgentes se puede observar ya en enero de 1992 cuando dos militantes del FPMR-A, Fabián López Luque y Alex Muñoz Hoffman, son asesinados en Santiago por una unidad antiterrorista de Carabineros⁶⁷.

Krauss, se encargó de precisar las iniciativas a poner en marcha: clausura de locales considerados focos delictivos; instructivos de seguridad ciudadana para ser implementados por las juntas de vecinos; aumento de la dotación e infraestructura de carabineros, e investigaciones y reformas al código penal para endurecer las condenas por delitos terroristas. S. K.: «Seguridad ciudadana: una tarea de todos», *Revista Análisis*, 376 (1-7 de abril de 1991), pp. 32-33.

⁶⁵ POZO, F.: «El desafío de la violencia», *Revista Análisis*, 325 (2-8 de abril de 1990), p. 5.

⁶⁶ CONTRERAS, M.: «Entrevista a Genaro Arriagada», *Revista Apsi*, 382 (24 de marzo-6 de abril de 1991), p. 12. Planteamientos similares sostenía la mayoría de la oposición derechista. El dirigente de la UDI, Julio Dittborn, manifestaba en 1991: «El gobierno ha tenido una actitud débil, poco enérgica, frente al terrorismo porque no ha tenido el coraje moral de enfrentar al terrorismo en su propia ley. Han tenido la ingenuidad de creer que la sola democracia o que las solas condenas de palabras harían que estos grupos cesaran en su acción y no es así. Aquí hay un grupo de gente desquiciada que no va a ceder y que hay que combatirla en la fuente, en su origen, con las mismas armas». GRUNEFELD, M.: «Entrevista a Julio Dittborn. Aylwin tiene una responsabilidad moral», *Revista Qué Pasa*, 1043 (8 de abril de 1991), p. 5.

⁶⁷ M. G.: «El nuevo terrorismo», *Revista Hoy*, 758 (27 de enero-2 de febrero de 1992), pp. 10-14. Este caso fue particularmente dramático ya que ambos frentistas, tras asaltar en la mañana del 22 de enero de 1992 un camión de transporte de dinero de la empresa Prosegur, en dependencias de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se refugiaron en una vivienda de la comuna de Ñuñoa, en la cual retuvieron a la

En esta misma línea de acción, la Policía de Investigaciones creó la BIOC (Brigada Investigadora de Organizaciones Criminales), la cual asumió un rol central en el combate directo contra las organizaciones armadas. A este organismo se unieron, también, la Jefatura de Inteligencia Policial (JIPOL), encargada de definir la política represiva de investigaciones, y la Brigada de Inteligencia Policial (BIP), cuya función era procesar la información de inteligencia obtenida regularmente de los apremios practicados a los detenidos en los cuarteles policiales⁶⁸. En relación con esta nueva forma de hacer frente al conflicto político, las fuerzas policiales empezaron a actuar con particular dureza contra las manifestaciones callejeras, especialmente contra los grupos juveniles entre los cuales crecían y se potenciaban los contingentes milicianos. Así, en las protestas populares que conmemoraron los treinta años del golpe militar de 1973, dos personas que participaban de las manifestaciones fueron asesinadas por carabineros. Una de ellas arrollada en el centro de Santiago por un coche policial de las fuerzas antimotines de carabineros y la otra, muerta a balazos en los disturbios que tuvieron lugar por la noche en la periferia de la ciudad de Santiago⁶⁹.

Otro aspecto importante en el nuevo diseño represivo fue la creación, mediante el Decreto Supremo número 363 de 1991, del Consejo Coordinador de Seguridad Pública. Este organismo quedó bajo la dirección del militante socialista Marcelo Schilling y tuvo a su cargo las tareas de procesar la información de inteligencia y seguridad referida a los grupos insurgentes y, a la vez, coordinar los distintos destacamentos policiales en las operaciones de neutralización de la acción armada⁷⁰. Uno de los aspectos que destaca en este nuevo diseño con-

familia residente. La ocupación de la vivienda se extendió hasta las 21 horas y la acción fue ampliamente cubierta por todos los medios de comunicación. Una vez que los insurgentes liberaron a la familia retenida, fuerzas especializadas de carabineros asaltaron la vivienda dando muerte a ambos jóvenes. *El Mercurio*, 23 de enero de 1992.

⁶⁸ Un análisis de este tema en VALENZUELA SETTER, S.: *Pacificación de los movimientos subversivos en Chile: análisis de las políticas represivas entre 1987 y 1994*, Santiago de Chile, Seminario para optar al Grado de Licenciado en Historia, Universidad de Chile, pp. 36-50.

⁶⁹ SOTO, M. I.: «Violencia política. El reventón del 11», *Revista Hoy*, 844 (20-26 de septiembre de 1993), pp. 8-11.

⁷⁰ Véase Decreto Supremo del Ministerio del Interior núm. 363, publicado en el *Diario Oficial*, el 26 de abril de 1991. Este organismo fue reemplazado en 1993 por la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (DSPI) y en 2004 por la Agencia

trainsurgente fue la infiltración de las organizaciones armadas. De hecho, parte importante de la información que permitió desbaratar los grupos subversivos provino precisamente de militantes descolgados de sus organizaciones de origen⁷¹. Estos sujetos, encuadrados como asesores en el interior del aparato de seguridad, facilitaron antecedentes detallados tanto de la línea política como respecto de la estructura interna y los modelos de intervención táctica de sus respectivas organizaciones. Este insumo de inteligencia, procesado posteriormente por analistas con formación en insurgencia y contrainsurgencia (especialmente en los países del antiguo campo socialista de Europa del Este), resultó fundamental en la derrota de las organizaciones armadas.

Se construyó, también, un cerco comunicacional en torno a la lucha insurgente que operó uniformando la información sobre las acciones armadas y rotulando cada una de ellas como conductas terroristas, anatematizando de manera eficiente la acción armada frente a la opinión pública⁷². En este sentido, los medios de comunicación contribuyeron sistemáticamente a la criminalización de las conductas y organizaciones insurgentes. Sus acciones armadas carecían, a juicio de los medios, de contenido político y se reducían a manifestaciones delictuales propias de individuos anómicos o derechamente ligados al mundo criminal⁷³.

Nacional de Inteligencia (ANI). El habla popular refiere genéricamente a todos estos organismos como «La Oficina».

⁷¹ El modelo que se adoptó fue el utilizado por el Estado italiano en la década de 1970 en su combate contra las Brigadas Rojas y consistió, básicamente, en estimular la delación entre los militantes de las organizaciones armadas. Al efecto se recurrió a la denominada Ley de Arrepentimiento Eficaz, también conocida como de «delación compensada», que premiaba con exención de responsabilidad penal y reubicación social a quienes entregaban información sobre sus organizaciones. Al respecto, véase «Chile, Ley núm. 19.172, sobre arrepentimiento eficaz», *Diario Oficial*, 4 de noviembre de 1992.

⁷² Un enfoque crítico sobre el tema en RAMOS, M., y GUZMÁN, J. A.: *La guerra...*, *op. cit.*, *passim*.

⁷³ Al respecto, el presidente de la República, Patricio Aylwin Azocar, manifestó en 1991: «La prevención y represión eficaces del terrorismo exigen también un cambio en la mentalidad colectiva de muchos sectores de la sociedad. Probablemente, hay quienes siguen viendo en la acción terrorista o violentista la obra de idealistas o héroes románticos, o que la miran con lenidad en razón de consideraciones sociales o económicas. Necesitamos de una decidida acción educativa y cultural que persuada a los chilenos de que el terrorismo es sinónimo de delincuencia, y que contribuir a prevenirlo o al progreso en la investigación de hechos terroristas no es un acto censurable,

En relación con lo anterior se diseñó un entramado normativo que endureció las penas contempladas en el Código de Justicia Militar, en la Ley de Seguridad Interior del Estado, en la Ley de Control de Armas y Explosivos y en la Ley Antiterrorista. De esta manera, las personas procesadas por delitos de connotación política eran sancionadas, tanto en los tribunales militares como en los civiles (en ocasiones en ambos simultáneamente), con elevadas penas de prisión por las acciones en las cuales habían participado. El cumplimiento de dichas penas, a su vez, se realizaba en un nuevo centro de reclusión: la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), diseñada para romper la resistencia política de los insurgentes, a través de un sistema penitenciario fundado en el aislamiento y el castigo⁷⁴.

En el momento de concluir el mandato presidencial de Patricio Aylwin, en marzo de 1994, la derrota político-militar de las organizaciones insurgentes era evidente⁷⁵. Ésta se encuentra vinculada a las acciones represivas del Estado, a la creciente desvinculación de las organizaciones respecto de las bases sociales que históricamente les habían servido de apoyo y a un importante nivel de descomposición de las confianzas internas, a raíz de las desertiones, delaciones y cooptaciones por parte de los nuevos organismos de seguridad. La transición a la democracia había impuesto sus términos.

sino una expresión de coraje cívico y de preocupación por el bien común», AYLWIN, P.: *Mensaje Presidencial. Expuesto ante el Congreso Pleno el 21 de mayo de 1991*, Valparaíso, Ediciones del Congreso Nacional, p. 21.

⁷⁴ Sobre este tema véase ROSAS ARAVENA, P.: *Rebeldía, subversión y prisión política...*, *op. cit.*, especialmente pp. 149-293.

⁷⁵ La información recopilada por organismos de derechos humanos indica que aproximadamente 400 personas fueron recluidas en prisión entre 1990 y 2000 acusadas de participar en acciones de carácter terrorista. De ellas, 170 fueron detenidas durante el periodo 1990-1994. Estos mismos informes señalan que 34 personas fueron ejecutadas por organismos de seguridad en la fase 1990-1994, en el contexto de la represión a las organizaciones insurgentes. Véase al respecto CODEPU: *Muertos en procedimientos policiales. Informe de Derechos Humanos, 1990-1994*, Santiago de Chile, CODEPU, 1994, y CODEPU: *Informe de derechos humanos, 1990-2000*, Serie Retrospectiva y Reflexión, Santiago de Chile, CODEPU, 2000.